

neral del Estado de Sinaloa, que les exige el pago del medio por ciento impuesto por el decreto núm. 119 de la Legislatura del Estado, expedido en 5 de Abril del presente año.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*J. García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Junio treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el C. Agustín Oliden, contra la resolución del Gefe político del Partido, C. Antonio Díaz, fecha 1º de Marzo último, en virtud de la cual fué condenado á perder el valor de unos efectos que se le empeñaron.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Agustín Oliden, dueño de la casa de empeño, conocida por del "Año Nuevo" ha ocurrido ante vd. pidiendo amparo contra la providencia de la Gefatura política de esta capital, de 1º del corriente, que lo condenó á una multa de 125 pesos, á la devolución

de un catre y al pago de 16 pesos, valor de otro, por faltas al reglamento de montepíos de 8 de Marzo del año pasado. Cree el quejoso violadas en su persona las garantías que otorga la Constitución en su art. 20, fracciones 4ª y 5ª Suspensa por ese juzgado aquella providencia, en lo relativo á la multa, por versarse sobre ella solamente la queja, se siguió ejecutando en cuanto al pago de los 16 pesos; mas al practicarse el embargo, ocurrió de nuevo el interesado, haciendo estensivo á este punto su recurso, y alegando violación de los artículos 13 y 14. El Juzgado provoyó también la suspensión del embargo.

Los preceptos constitucionales alegados por el quejoso, no pueden tener, en concepto del Fiscal, aplicación alguna en el presente caso. Es evidente que el gobierno del Estado, ha tenido facultad para reglamentar las casas de empeño, y que ha podido por lo mismo, encomendar el cuidado de ellas á los Jefes de Partido, autorizándolos para corregir gubernativamente los abusos que se cometan. En el reglamento de que se trata, art. 14, se ha designado la multa desde 25 pesos hasta 200, ó la prisión, como castigo á los infractores del mismo reglamento, y de consiguiente la autoridad política, calificando bien ó mal un hecho que se le denunció contra el C. Oliden, y castigándole por él, ha obrado en el círculo de sus atribuciones.

El expediente que con tal motivo se formó, demuestra que el quejoso, tuvo á su disposición todos los medios de defensa que podía desear, pues se le dió término bastante para producir sus pruebas, y se le oyeron cuantos alegatos quiso hacer, practicando además la Gefatura de oficio, y para esclarecimiento del negocio, una información minuciosa. Tampoco se trataba de un juicio criminal. Así es, que ni se violó el art. 20 en sus fracciones 4ª y 5ª ni pueden tener aplicación oportuna en este asunto.

Tampoco la tienen los art. 13 y 14, por que no tratándose sino de una corrección

por faltas á un reglamento de montepíos, cuyo giro pertenece propiamente á la policía, la autoridad administrativa ha estado en su derecho para la imposición de la multa, conforme al art. 21 de la Constitución.

Por tanto, el Fiscal es de sentir que la justicia federal no debe amparar al C. Agustín Oliden contra la providencia referida del C. Jefe de partido, sin que por esto el quejoso deje de tener su derecho expedito, para ocurrir al Gobierno en demanda de la revocación ó modificación de dicha providencia.

Durango, Marzo veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Vicente Castro*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Durango, Mayo trece de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el recurso de amparo promovido por el C. Agustín Oliden contra las providencias de la Jefatura política del partido de Durango, principalmente contra la de 1º de Marzo último, con motivo de la queja ó acusación que ante aquella autoridad presentó el C. Rafael Ibargüen contra Oliden sobre haber éste enagenado dos catres de fierro que se habían empeñado por el C. Lio. Benito del Campo en la casa de prendería ó montepío que el mismo Oliden tenía abierto en esta ciudad, y considerando:

Primero; que el punto de que se dió conocimiento á la Jefatura política, era realmente contencioso, debía dar lugar en consecuencia, á un juicio contradictorio formal, en que se esclareciesen los hechos presentados por Ibargüen y negados por Oliden, y exigía él, que con autoridad jurisdiccional del mismo carácter contencioso y completo conocimiento de causa, se resolviera la cuestión de derecho, que era materia de la contención entre ambas partes.

Segundo; que aunque en la providencia de la foja 20 vta. de 1º de Marzo afirma el Cefe político que su procedimiento no

importa un juicio formal, obra contra esta aseveración la circunstancia de estarse averiguando los hechos alegados por Ibargüen y contradichos por Oliden, con el objeto de poner en claro la contravención de éste en perjuicio de aquel á los términos y obligaciones que el contrato de prenda trae consigo y que eran de mayor atención tratándose de un establecimiento público de mútuo usurario, en cuya averiguación y discusión, enteramente contradictoria y judicial, procedía el Cefe político en un verdadero juicio.

Tercero; que aunque el ejecutivo del Estado haya obrado según sus facultades, reglamentando los establecimientos de aquella clase y cometiendo á la autoridad subalterna del mismo orden atribuciones para el puntual cumplimiento de sus disposiciones, estas se cifieron y debían ceñirse á los objetos y puntos de policía administrativa; mas nunca podían constituir á los Jefes políticos en jueces para conocer y decidir en las cuestiones manifestamente contenciosas, que pudieran ocurrir entre los prestamistas y mutuatarios; pues entendiendo los Reglamentos de otra manera, sería preciso ver en ellos infringida la base del sistema de gobierno de la Nación y de los Estados, consignada en la división de poderes que establece el art. 50 de la Constitución federal.

Cuarto; que para la imposición de la multa de que habla la última parte de la providencia de fojas 13 de 24 de Febrero, era indispensable dar por cierto y averiguado el abuso; y esto no podía hacerse sin calificar los hechos antecedentes, para lo que la misma Jefatura no se creía claramente autorizada, según expresa en la primera parte de dicha providencia; y sin embargo, prosiguió conociendo en la indagación y controversia hasta sentenciarla en el propio día 1º de Marzo, cuando acababa de asegurar que no se trataba de un juicio.

Quinto; que ejerciendo el Cefe político funciones judiciales, abriendo y fallando un verdadero juicio, se crió en Tribunal ex-

pecial, y violó con este hecho la garantía establecida en el art. 13 del expresado Código fundamental, para que nadie pueda ser juzgado por leyes privativas, ni por Tribunales especiales.

Sesto; que cambiando el personal de la Jefatura política, ésta ha manifestado á fojas 20 vta. que no sostiene el fallo de que se trata en lo relativo á la multa. Visto todo lo pedido, lo demás alegado por el quejoso, lo expuesto por el Ministerio público y cuanto mas ver convino, el C. Juez de Distrito del Estado falla:

Primero; que en debida observancia del art. 101 inciso 1º de la Constitucion de la República, la justicia de la Nacion ampara y protege al C. Agustin Oliden contra la parte que ha quedado subsistente de la sentencia de 1º de Marzo del corriente año, dada por el Gefe político del Partido de esta capital.

Segundo; que de conformidad con el art. 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, se publique esta sententencia en el periódico *Oficial* del Estado, y se remitan estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Y por este auto definitivamente juzgando así lo proveyó y firmó por ante mí el mismo C. Juez de Distrito. Certifico.—*Gerónimo Sida.*—*Juan B. Arellano*, Secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en cuatro de Marzo del corriente año promevió ante el Juez de Distrito de Durango el C. Agustin Oliden, contra la resolucion del Gefe político del Partido, C. Antonio Diaz, fecha 1º de Marzo último, en virtud de la cual fué condenado á perder el valor en que se le empeñaron dos catres, reclamados

por el C. Rafael Ibargüen, y el rédito; á devolver uno de ellos que presentó; á pagar otro en diez y seis pesos que habia vendido, y á satisfacer de multa por infraccion del Reglamento de Montepíos y para ayuda de una de las cologiaturas de la municipalidad, la suma de ciento veinticinco pesos, con cuyo procedimiento alega el quejoso que se han violado en su persona las garantías que consignan los artículos 13, 14 y 20 de la Constitucion federal. Visto el informe del C. Ignacio Lira, sucesor de Diaz en la Jefatura política, exponiendo que no sostiene la resolucion de éste en cuanto á la multa, y remitiendo las diligencias practicadas sobre el negocio: Vistas estas diligencias, lo pedido por el Promotor fiscal, fundando la improcedencia del recurso de amparo; las pruebas y alegatos del promovente para obtenerlo, con todo lo demás que de autos consta y ver convino. Considerando:

Primero; que respecto de la multa impuesta al quejoso por el Gefe político Diaz, no hay lugar á fallar, habiendo dicho su sucesor que no sostiene la pena.

Segundo; que los demás puntos que comprende la resolucion de aquel funcionario, afectan la esencia del contrato de prenda, y constituyen la materia de una cuestion judicial de la exclusiva competencia de los tribunales comunes, en cuya cuestion los interesados tienen sus derechos expeditos, y la autoridad política no ha podido conocer ni decidir, sin violar la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion de la República. Por tales consideraciones, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Durango, fecha 13 de Mayo próximo pasado, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Agustin Oliden contra la parte que ha quedado subsistente de la resolucion de 1º de Marzo del corriente año, dada por el Gefe político de la expresada capital.

Devuélvanse sus actuaciones al Juez remitente con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio tres de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Monterrey por el C. Lic. Simon de la Garza y Melo, contra un auto del Juez 3º de lo Civil de aquella Ciudad, que declaró en formal prision al quejoso.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que habiéndose presentado el C. Lic. Ignacio Galindo, como defensor del Lic. D. Simon de la Garza y Melo, pidiendo amparo para este último, contra el auto de formal prision dictado por el Juez 3º de letras de esta 1ª fracción judicial, en la acusacion que tiene hecha en su contra el actual Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, imputándole falsedad en la declaracion que dicho Sr. Garza y Melo rindió ante la Seccion del gran Jurado que encausó al expresado Sr. Presidente, por el delito de haber ejercido su profesion de abogado y servido de apo-

derado en negocios agenos, siendo á la vez Magistrado, por cuyo delito, habiéndoselo declarado responsable, se declaró compurgado con el tiempo que estuvo separado de su encargo; se ha servido ese Juzgado, segun su auto de esta fecha, dar conocimiento al que suscribe, de tal peticion, para que emita su juicio ó parecer, con vista de lo dispuesto en el art. 8º de la ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869, y 25 de la misma, sobre si debe ó no darse entrada al amparo.

Y obsequiando el Fiscal la prevencion contenida en tal auto, entrará al examen de la cuestion propuesta, teniendo á la vista, no solo lo dispuesto en los artículos citados de la ley reglamentaria referida, sino lo dispuesto tambien en la Constitucion general del país, que es la suprema ley, y lo que sobre el particular han expuesto jurisconsultos eminentes, tanto nacionales como extranjeros, á fin de que la opinion que emita en tal cuestion, si no es la verdadera, no sea tampoco contraria al espíritu de la ley fundamental, que en todos casos, condiciones y circunstancias debe ser atendida, antes que ninguna otra; y entrará tambien en esa discusion, en la que desde luego confiesa, no será el primero en la concepcion de los principios y raciocinios que va á exponer, porque considera que las leyes establecidas reglamentando ó organizando los derechos de los ciudadanos, otorgados en la Constitucion de un país, vienen á ser complemento y garantía de esos mismos derechos; y por esto conviene en caso de un conflicto, entre la ley fundamental y la reglamentaria entrar á una concienzuda discusion con objeto de hacer, en un caso dado, prevalecer la que esté mas conforme con la razon, la justicia, la equidad y con los derechos de los mismos ciudadanos, en cuyo favor se hayan dado.

Fácilmente se comprenderá por lo dicho, que existe una patente contradiccion, entre la ley reglamentaria ya citada y lo dispuesto en la Constitucion política; en la prime-